

Revisión de las Directrices sobre la financiación de riesgo

Nota explicativa

Las revisiones propuestas de las Directrices sobre la financiación de riesgo¹ están directamente relacionadas con los resultados del control de adecuación, una evaluación exhaustiva que determina si las normas sobre ayudas estatales, que formaban parte de la modernización de dichas ayudas, se adecuan a sus objetivos. Los resultados del control de adecuación se exponen en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el control de adecuación, publicado el 30 de octubre de 2020².

Los resultados de la evaluación del control de adecuación confirmaron que, en general, las normas sobre ayudas estatales para la financiación de riesgo aplicadas en 2014 han funcionado correctamente y han contribuido a corregir las deficiencias del mercado que impedían a las pymes de la UE atraer la financiación necesaria para crecer y prosperar, sin por ello falsear indebidamente la competencia.

Ahora bien, la evaluación del control de adecuación también ha puesto de manifiesto la necesidad de simplificar y aclarar la aplicación de las normas con el fin de facilitar la implantación de regímenes de ayuda estatal en apoyo de la financiación de riesgo. Con este objetivo, están previstas las siguientes categorías de modificaciones específicas de las Directrices sobre la financiación de riesgo:

- i. reordenar las disposiciones existentes para facilitar su comprensión y aplicación, incluida la consolidación de los requisitos para la evaluación *ex ante*, que actualmente están desperdigados por diferentes partes de las Directrices (**Categoría 1**);
- ii. aclarar el contenido específico y el nivel de las pruebas necesarias para demostrar una deficiencia específica del mercado u otro obstáculo relevante en el acceso a la financiación, en consonancia con la práctica casuística existente (**Categoría 2**);
- iii. centrar las Directrices en la compatibilidad de las ayudas estatales para evitar solapamientos con la Comunicación sobre el concepto de ayuda (**Categoría 3**);
- iv. racionalizar las formulaciones existentes y armonizar las definiciones con el fin de hacerlas más coherentes con el RGEC sin alterar el fondo de las normas (**Categoría 4**).

Las disposiciones de las Directrices sobre la financiación de riesgo se completan con el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC)³, que fija una serie de condiciones de compatibilidad *ex ante* sobre cuya base los Estados miembros pueden aplicar medidas de ayuda estatal sin notificarlas previamente a la Comisión. La Comisión, en paralelo a la revisión de las Directrices sobre la financiación de riesgo, está inmersa en un proceso de revisión del propio RGEC que incluirá también una modificación específica de las disposiciones del RGEC que atañen a la financiación de riesgo y garantizará la coherencia con las Directrices revisadas sobre la financiación de riesgo.

¹ Directrices sobre las ayudas estatales para promover las inversiones de financiación de riesgo (DO C 19 de 22.1.2014, p. 4).

² Puede consultarse en línea en la dirección: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html

³ Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1, última modificación: DO L 215 de 7.7.2020, p. 3).

Las Directrices revisadas sobre la financiación de riesgo aportan las siguientes mejoras concretas:

Categoría 1: reordenar las disposiciones existentes para facilitar su comprensión y aplicación

- a. Se ha introducido una nueva subsección 4.1 para consolidar todos los requisitos relacionados con la evaluación *ex ante*, que en las actuales Directrices sobre la financiación de riesgo están desperdigados en varias subsecciones. Esto no solo simplifica la estructura de las Directrices sobre la financiación de riesgo, sino que también aporta más claridad a los Estados miembros.
- b. La sección 4 de las Directrices sobre la financiación de riesgo, que trata de la evaluación de la compatibilidad aplicable a las medidas de ayuda de financiación de riesgo que deben notificarse a la Comisión, ha sido revisada para incorporar la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2020 en el asunto C-594/18 P⁴.

Categoría 2: aclarar el contenido específico y el nivel de las pruebas necesarias para demostrar una deficiencia específica del mercado u otro obstáculo relevante en el acceso a la financiación, en consonancia con la práctica casuística existente

- a. El control de adecuación puso de manifiesto que los Estados miembros tienen dificultades para cuantificar el déficit de financiación. Por ello, el requisito de cuantificar el déficit de financiación se ha hecho más proporcionado, es decir, solo seguirá aplicándose a los regímenes con los importes de ayuda más elevados para beneficiarios individuales. Así pues, las Directrices revisadas sobre la financiación de riesgo establecen distintos requisitos, dependiendo de la situación:
 - En la mayoría de los casos (por ejemplo, las pequeñas empresas de capitalización media, las empresas de mediana capitalización innovadoras, las empresas que reciben la ayuda más de diez años después del registro) sigue siendo necesaria una evaluación *ex ante* que demuestre una deficiencia específica del mercado (u otro obstáculo relevante para el acceso a la financiación) pero, siempre y cuando la inversión por empresa esté por debajo del umbral previsto en el RGECE de 15 millones EUR, ya no es necesario cuantificar el déficit de financiación.
 - Por lo que se refiere a las medidas de financiación de riesgo en las que la participación de los inversores privados es inferior a los porcentajes mínimos establecidos en el RGECE, la evaluación *ex ante* debe aportar, además, una evaluación detallada del nivel y estructura de la oferta de financiación privada para el tipo de empresa subvencionable en la zona geográfica de referencia y demostrar que la deficiencia del mercado detectada u otro obstáculo relevante no puede solventarse con medidas diseñadas conforme a los requisitos establecidos en el RGECE.

⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2020, Austria/Comisión (Hinkley Point C), asunto C-594/18 P, EU:C:2020:742.

- En el caso de las inversiones de financiación de riesgo que superen el límite máximo establecido por empresa subvencionable en el RGEC (es decir, 15 millones EUR), la evaluación *ex ante* debe también cuantificar el déficit de financiación (es decir, el nivel de la demanda de financiación no satisfecha de las empresas subvencionables) debido a la deficiencia del mercado detectada (u otro obstáculo relevante).

En términos generales, la presente propuesta reduce la carga administrativa para los Estados miembros, pero mantiene el requisito de cuantificación en los regímenes que aportan las cantidades de ayuda más elevadas a empresas individuales. En el caso de los demás regímenes, sigue siendo necesaria una evaluación *ex ante* que demuestre una deficiencia del mercado (u otro obstáculo relevante) en combinación con otras salvaguardias para garantizar que la ayuda sigue siendo proporcional a la deficiencia del mercado (o al obstáculo relevante).

- b. En el caso de los instrumentos fiscales, el punto 149 de las Directrices sobre la financiación de riesgo limitaba hasta ahora la inversión total por beneficiario a los 15 millones EUR establecidos en el RGEC. Pero en el caso de los instrumentos financieros no se aplica tal restricción. Por consiguiente, este punto de las Directrices sobre la financiación de riesgo se ha adaptado a la norma para los instrumentos financieros y, por lo tanto, también permite inversiones de financiación de riesgo superiores a 15 millones EUR en el caso de los instrumentos fiscales, si pueden justificarse sobre la base de la evaluación *ex ante*.

Categoría 3: centrar las Directrices en la compatibilidad de las ayudas estatales para evitar solapamientos con la Comunicación sobre el concepto de ayuda

En 2016, dos años después de la entrada en vigor de las Directrices sobre la financiación de riesgo de 2014, la Comisión publicó, como parte del paquete de modernización de las ayudas estatales, la Comunicación sobre el concepto de ayuda. En dicha Comunicación, la Comisión aclaraba cómo consideraba que debía interpretarse el concepto de ayuda estatal establecido en el Tratado, y en qué casos una medida de apoyo público no constituye ayuda estatal puesto que se lleva a cabo en condiciones normales de mercado. Las orientaciones facilitadas a tal efecto en la Comunicación sobre el concepto de ayuda permiten suprimir la sección 2.1, «Criterio del operador en una economía de mercado», de las Directrices revisadas sobre la financiación de riesgo para racionalizar su contenido a la hora de determinar la compatibilidad de las medidas de ayuda.

Categoría 4: racionalizar las formulaciones existentes y armonizar las definiciones para hacerlas más coherentes con el RGEC

- a. Las Directrices sobre la financiación de riesgo de 2014 daban una definición *ad hoc* de «empresa de mediana capitalización innovadora»: aquellas empresas de mediana capitalización cuyos costes de I+D e innovación ascienden, como mínimo, al 15 % del total de sus costes de funcionamiento durante al menos uno de los tres años previos a la primera inversión en el marco de la medida de ayuda estatal de financiación de riesgo, o, como mínimo, al 10 % anual de sus costes de funcionamiento en los tres años anteriores a la primera inversión al amparo de la medida de ayuda estatal de financiación de riesgo. El texto actual propone adaptar esta definición al RGEC y define las «empresas de mediana capitalización innovadoras» como empresas de

mediana capitalización que son, al mismo tiempo, «empresas innovadoras» en el sentido del artículo 2, apartado 80, del RGEC. Por consiguiente, hay más empresas de mediana capitalización que pueden considerarse «empresas de mediana capitalización innovadoras» y, por lo tanto, pueden optar a ayudas de financiación de riesgo con arreglo a las Directrices sobre la financiación de riesgo, ya que el carácter innovador puede establecerse, al igual que en el RGEC, bien mediante una evaluación realizada por un experto externo que lo certifique, bien cuando los costes de I+D asciendan como mínimo al 10 % del total de sus costes de funcionamiento en al menos un año de los tres años anteriores a la ayuda.

- b. En la sección 3, relativa a las ayudas notificables, se propone modificar el actual punto 47, letra c), de modo que las medidas que permiten a las empresas recibir ayudas de financiación de riesgo más de diez años después del registro se evalúen con arreglo a las Directrices sobre la financiación de riesgo mientras que, con arreglo a las normas actuales, el límite se fija en más de siete años después de su primera venta comercial.

Con ello se pretende evitar incertidumbres a la hora de determinar la «primera venta comercial», señaladas durante la evaluación del control de adecuación. Sustituir la fecha de la «primera venta comercial» por la fecha de «registro» como fecha de inicio del período durante el cual las empresas pueden recibir generalmente ayudas a la financiación de riesgo simplificará la aplicación de las normas, dado que el registro es más fácil de interpretar que la «primera venta comercial». En el caso de empresas subvencionables que no estén obligadas a registrarse, podrá considerarse que el período de subvencionabilidad de diez años empieza a contar desde el momento en que la empresa inicie su actividad económica o desde el que esté sujeta a impuestos por su actividad económica. Además, el uso de la fecha de registro como base de referencia es coherente con determinadas disposiciones del RGEC (como el artículo 22 «Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales»).

Se propone ampliar el período de referencia de siete a diez años para evitar reducir de facto el período de subvencionabilidad, ya que el registro suele tener lugar antes de la primera venta comercial. A este respecto, el estudio realizado en la evaluación apunta a diez años como límite adecuado para la admisibilidad, dado que las pymes de diez años o menos de antigüedad es más probable que encuentren problemas a la hora de acceder a la financiación que las pymes con más experiencia.